

Olga Pellicer de Brody

**La seguridad
nacional en México**^{* 1}

El tema de la seguridad nacional no ocupa un lugar privilegiado en las reflexiones sobre la vida política mexicana. Desde finales de la segunda guerra, asegurado el avance de la fracción civilista de la familia revolucionaria y consolidadas las organizaciones de masas y su forma de articulación al Estado, el tema fue perdiendo relieve en el discurso político de los grupos dominantes en México. Se pensaba, con razón, que siendo vecinos de la potencia militar más poderosa del mundo contemporáneo carecía de sentido invertir recursos en armamentos o planes para defenderse de la agresión externa; se pensaba, también, que el alto grado de control sobre las demandas y conflictos de los diversos grupos sociales hacía innecesario convertir a la seguridad nacional en elemento central para la legitimación del grupo gobernante.

No es sino hasta fechas muy recientes cuando surgen acontecimientos de signo y naturaleza distinta que están invitando a nuevas reflexiones sobre el tema de la seguridad nacional. El primero de ellos es la reaparición de México como exportador de petróleo y poseedor, además, de los yacimientos gigantes más importantes que se han descubierto en los últimos tiempos; el segundo, la situación de Centroamérica y las opiniones que se están manifestando en Estados Unidos sobre los efectos que el avance de movimientos revolucionarios en esa región puede tener en la vida interna de México.

Sería prematuro llegar a conclusiones sobre el grado en que ambos acontecimientos afectarán las nociones tradicionales en materia de seguridad nacional. No es tarde, sin embargo, para preguntarse: ¿cuáles son los motivos por los que ambos acontecimientos están dando vigencia al problema de la seguridad nacional en México? ¿Hasta dónde propician la participación de nuevos actores en su definición y proyectos para defenderla?

^{1*} El presente trabajo fue presentado en el Seminario de Análisis Económico-Social de las Relaciones entre Estados Unidos y México celebrado en la Universidad de Stanford, California, en noviembre de 1980.

PETRÓLEO Y SEGURIDAD NACIONAL

Las riquezas petroleras mexicanas se divulgaron cuando el tema de la energía se había convertido en preocupación central de los países industriales del mundo capitalista, en particular Estados Unidos. Se ha señalado repetidas veces que ningún otro hecho del pasado reciente ha situado en posición tan vulnerable a las elites políticas encargadas de diseñar la política exterior de Estados Unidos como el embargo petrolero árabe de 1973, la elevación de los precios del petróleo bajo el amparo de la OPEP, y la pérdida de control sobre la zona del Golfo Pérsico que siguió a la revolución islámica de Irán.² La incertidumbre respecto a los precios y posibilidades mismas de obtener abastecimiento de crudo ha coincidido con diversas circunstancias que amplían las dimensiones de la crisis energética norteamericana: la fuerte dependencia de petróleo importado, el cual representa más del 40% del total que se consume en Estados Unidos; las proyecciones pesimistas sobre la posibilidad de transitar, a mediano plazo, hacia una época nueva caracterizada por la utilización de fuentes alternativas de energía; finalmente las dificultades del gobierno norteamericano para poner en práctica programas eficaces de conservación de energía, o utilización de carbón; prueba de ello fueron las vicisitudes y fracasos del primer plan energético de Carter.

Dentro del cuadro anterior, no es sorprendente que se vea al petróleo mexicano como uno de los factores más eficientes para aminorar los problemas energéticos estadounidenses. En efecto, al aumentar la oferta en el mercado mundial contribuye a la estabilización de los precios; de exportarse en cantidades significativas, daría un margen de acción más comfortable para organizar la transición hacia otras fuentes de energía, y puede ser una fuente segura de abastecimiento en caso de que un agravamiento en la situación del Medio Oriente paralice —para no dar sino el ejemplo más alarmista— los envíos del principal proveedor estadounidense: Arabia Saudita.

Visto así, México ha adquirido importancia vital para Estados Unidos, por su calidad de país petrolero. Sería erróneo regocijarse de este hecho atendiendo, únicamente, al probable aumento del poder negociador de México. Lo cierto es que por el valor estratégico de sus recursos naturales, México se ha colocado dentro de la categoría de países que merecen una "política especial" por parte de

² Véase Richard Fagen, "El petróleo mexicano y la seguridad nacional de Estados Unidos", en *Las perspectivas del petróleo mexicano*, ed. El Colegio de México, México, 1979, pp. 327-42.

Estados Unidos. Reflexionar sobre los lineamientos generales de esa política y sus implicaciones para la seguridad nacional de México, se ha convertido, pues, en una tarea necesaria.

En el decenio de los setentas la "política especial" de Estados Unidos hacia los productores de petróleo se definió claramente en el caso de los países del Medio Oriente. Después de los acontecimientos de 1973, Estados Unidos se esforzó por perfeccionar sus métodos para alcanzar allí el objetivo prioritario de mantener un nivel de producción petrolera que permitiera el flujo hacia Estados Unidos de petróleo en cantidades y a precios razonables. Para ello se siguieron diversas estrategias: se fortalecieron las alianzas con los dirigentes de países claves del área, como Irán y Arabia Saudita, poniendo en pie programas masivos de asistencia militar y económica destinados a consolidar a los grupos dominantes que se mostraban más favorables a los intereses norteamericanos y a propiciar un tipo de desarrollo económico que, al crear una mayor "interdependencia" con Estados Unidos, hiciera más improbable un embargo similar al ocurrido en 1973. Al mismo tiempo, se propiciaron inversiones financieras de aquellos países en la economía norteamericana ofreciéndose, con esto, un buen argumento para justificar una explotación masiva del petróleo que lleva a obtener ingresos que no pueden ser utilizados a corto plazo. Ahora bien, si los medios pacíficos no fuesen suficientes para asegurar el flujo petrolero a Estados Unidos, se ha pensado en la intervención militar como una "alternativa siempre presente para un consumidor a quien se le priva de abastecimientos esenciales". Tal intervención ha sido ampliamente discutida y puede afirmarse que es considerada por diversos grupos en Estados Unidos como una alternativa riesgosa pero, en ciertos momentos, ineludible.³

En el caso de los países del continente americano, la política hacia los productores de petróleo —que ocupan hasta ahora un lugar secundario dentro de los proveedores norteamericanos— no se definió con características tan agresivas. Canadá pudo resistirse a las propuestas para una política energética común con su vecino del sur; Venezuela redujo sus niveles de producción sin dar lugar a situaciones abiertamente conflictivas con Estados Unidos. La pregunta es cuál sería la política hacia México en el caso de diversas situaciones en las que o bien México aumenta su producción hasta alcanzar más de cinco millones de barriles por día; o bien, sin llegar a esos niveles de producción, se convierte en el

³Una buena compilación de trabajos en los que se discuten problemas de la situación energética norteamericana, y las relaciones con los países productores, es la publicación del Congreso Norteamericano *Project Interdependence; US and World Energy Outlook Through 1990*, Congressional Research Service, Washington, junio, 1977. Véase, en particular, el artículo de John Collins y Clyde Mark "Military Solutions to US Petroleum Problems", pp. 726-50.

país clave para abastecer a Estados Unidos en situaciones de emergencia internacional; o bien se resiste a una relación energética estrecha entre los dos países.

Sería erróneo prever para México políticas como las formuladas hace algunos años para el caso de Irán. Por una par-te, el fracaso tan sonado de la relación "extra especial" con ese país puso en evidencia la necesidad de ser más cautelosos en la política hacia países que, como es también el caso de México, son capaces de fuertes reacciones nacionalistas. Por la otra, las condiciones internas de México, su situación geopolítica y la tradición establecida en las relaciones mexicano-norteamericanas son muy distintas. El desarrollo económico de México en los últimos treinta años aunado a la vecindad geográfica con Estados Unidos, ha dado por resultado un cuadro muy complejo de vínculos entre ambos países en el que sería difícil actuar atendiendo, únicamente, al problema del petróleo. Están de por medio los múltiples intereses de empresarios y financieros norteamericanos en la economía mexicana, la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, el valor de la "buena vecindad" para el conjunto de las relaciones interamericanas, y las repercusiones que los problemas internos de México pueden tener en la vida cotidiana de Estados Unidos. Por todo ello, es difícil que, aun en caso de un serio agravamiento de la crisis energética, México sea percibido en función, solamente, de su papel como abastecedor de energéticos. Esto ya es claro en la cautela con que ha evolucionado la política hacia el petróleo mexicano, en el hecho de que parecen debilitarse las presiones a favor de un rápido incremento de la producción mexicana y la atención se dirige, más bien, a la organización del comercio global entre los dos países así como a la delineación de planes para contar con el crudo mexicano en casos de emergencia.

Sin embargo, es sumamente probable que elementos de la política "especial" hacia los países productores se reproduzcan en la política de Estados Unidos hacia México en los próximos años: el acercamiento a los grupos internos que sean más favorables a una relación energética estrecha con Estados Unidos; el ofrecimiento de oportunidades para la inversión de excedentes económicos en Estados Unidos; el empeño en promover la "interdependencia" entre los dos países, apoyando un tipo de desarrollo económico que final-mente haga coincidir los intereses mexicanos con los norte-americanos en materia de energía. Por último, no se pueden descartar aquellos proyectos para una mayor vigilancia sobre el rumbo de la vida política de México que implican una franca tendencia intervencionista.

Aquí, como en otras regiones geográficas, es difícil que ocurra la intervención militar abierta; la complejidad de las relaciones entre los dos países, a que ya nos hemos referido, sería el primer freno para ello. Sin embargo, pueden preverse intervenciones más sutiles, resultado de una supervisión más intensa de la vida política mexicana, que lleven a ver con alarma cualquier desviación hacia comportamientos que entren en conflicto, o amenacen con entrar en conflicto, con intereses vitales de Estados Unidos. Esta mayor sensibilidad frente a los acontecimientos políticos en México es una de las circunstancias, aunque no la única, que subyace detrás de las preocupaciones norteamericanas sobre la situación de Centroamérica y la seguridad nacional en México.

LA REVOLUCIÓN EN CENTROAMÉRICA Y LA SEGURIDAD NACIONAL. EN MÉXICO

Nadie duda que la revolución sandinista representa, igual que la cubana, un momento decisivo para la presencia de Estados Unidos en el Caribe y Centroamérica. No se puede predecir todavía el rumbo que seguirá la revolución en Nicaragua, ni el grado en que se Logre implantar allí un proyecto político-económico de franca inclinación socialista. Sin embargo, ya se puede afirmar que la influencia norteamericana ha desaparecido de los mandos de dirección política, y que el ejemplo sandinista ha dado un impulso --quizá el definitivo-- a las luchas revolucionarias en otros países de la región.

Semejante situación está produciendo grandes temores en Estados Unidos. Se piensa, con razón, que la situación actual de Centroamérica es el prólogo a una etapa histórica en la que Estados Unidos verá disminuir sensiblemente su capacidad de control sobre la zona mientras aumenta, en contrapartida, la influencia cubana. A la luz de esos temores debe observarse el interés norteamericano en el papel que México desempeña en el área centroamericana, y su preocupación por las tendencias de su política exterior.

Cabe recordar que la simpatía por las revoluciones en América Latina es uno de los rasgos más sobresalientes de la política exterior de México. Diversos ejemplos están allí para probarlo. México fue el único país que se opuso a la imposición de sanciones a Cuba y mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con la isla en momentos cuando el objetivo central de la política interamericana era el aislamiento del régimen encabezado por Fidel Castro. Poco después, fue uno de los partidarios más entusiastas del gobierno de Salvador Allende y, a su caída, abrió las puertas para recibir a los asilados,

chilenos y de otras nacionalidades, que huían de los regímenes militares del cono sur. En la actualidad, da un apoyo incondicional a Nicaragua, bajo la forma tanto de asistencia técnica y financiera, como de ventas de petróleo. En una etapa crítica para la Revolución cubana, debido a la conjunción de situaciones internas e internacionales que favorecen el recrudecimiento de viejos anhelos intervencionistas; destinados a debilitar al régimen revolucionario, el presidente mexicano hizo un gesto de apoyo y simpatía llevando a cabo una visita a la isla. Finalmente, los dirigentes mexicanos han expresado su respeto por el intento de grupos revolucionarios 'de cambiar las estructuras políticas anacrónicas de países como el Salvador.

Esta solidaridad con los movimientos revolucionarios en América Latina responde, entre otras causas, a la importancia que tienen los valores revolucionarios en el discurso político de los dirigentes mexicanos, así como a la necesidad de mantenerlos vigentes como elemento de legitimación de un sistema político que insiste en presentarse como emanado del movimiento revolucionario de 1910. Esto no _ significa que el gobierno mexicano haya dado pruebas de interés por comprometerse de manera más activa y directa en los esfuerzos para la transformación de las viejas estructuras políticas centroamericanas. Apegándose firmemente a la "no intervención" se ha abstenido de proporcionar armas o cualquier otro tipo de asistencia militar a los grupos rebeldes. Por lo demás, no hay indicios de una estrategia por parte de México para que, aprovechando los momentos de cambio, extienda su influencia al sur de la frontera creando las bases para una mayor penetración económica o impulsando el modelo político mexicano como la mejor opción para el cambio social en la región. Dicha estrategia corresponde a otros países del continente, particularmente Venezuela.

Independientemente de lo agresivo o no del proyecto del gobierno mexicano para Centroamérica —y hay motivos para afirmar que se tienen compromisos e intereses limita-dos— el hecho es que su política exterior se ha convertido en un obstáculo al avance de proyectos auspiciados por otros países del continente. So pretexto de evitar la violencia, Venezuela, y en menor grado Costa Rica, tratan de impulsar el apoyo a, regímenes que cuentan con una participación demócrata-cristiana, como la actual Junta del Salvador. Durante el gobierno de Carter, Estados Unidos exploró la posibilidad de tener aliados para una política destinada a cancelar la opción revolucionaria y a buscar, después, formas de "transición pacífica" hacia regímenes con mayor estabilidad política. Con el simple peso de sus tradiciones, México dificulta, al grado de hacerla imposible; una acción concertada en el orden

internacional a favor de semejantes proyectos.

Existen diversos motivos para que Estados Unidos vea con aprehensión la política de México hacia Centroamérica. Por una parte, es indicio de la persistencia de valores nacionalistas y revolucionarios que no sólo son disfuncionales para un proyecto de acción internacional contra el avance de la revolución centroamericana; además, es presagio de negociaciones difíciles cuando se traten de buscar compromisos más profundos en el campo de los hidrocarburos. Es comprensible, pues, el interés por popularizar ideas según las cuales, de acuerdo con la llamada "teoría del dominó", la subversión comunista puede extenderse desde Nicaragua hasta las mismas zonas petroleras mexicanas. En una intervención reciente ante las cámaras de televisión, una voz tan escuchada como la de Henry Kissinger se refirió a tales peligros al señalar:

se ha iniciado un proceso que todavía no ha llegado a su punto culminante, que se ha extendido ya de Nicaragua a Salvador, que está destinado a tener un efecto en Guatemala y seguramente tendrá un impacto en México. Y es en este último caso cuando será un asunto muy- grave para nosotros.⁴

Con el mismo alarmismo, pero añadiendo juicios sin fundamento sobre la presencia de grupos revolucionarios en México, Constantine Menges, asesor de Reagan para asuntos de política exterior, quien ha tomado a su cargo la tarea de interpretar los efectos de la política mexicana en Centroamérica, señala en un trabajo reciente:

La extrema izquierda considera, seguramente, que la política exterior mexicana se ha convertido — objetivamente— en uno de sus apoyos más valiosos durante la transición hacia el poder y la consolidación en países de Centroamérica y el Caribe. No hay duda de que, si la izquierda toma el poder en El Salvador o Guatemala en un futuro próximo, todos los grupos clandestinos con base en México que ahora mandan apoyo a los revolucionarios, serán usados por Cuba y los nuevos gobiernos extremistas para mandar ayuda a México y producir allí una segunda y "más auténtica" revolución mexicana.⁵

Hasta ahora semejantes versiones provienen, exclusiva-mente, de comentaristas y miembros de la

4 Programa de la NBC, 3 de septiembre de 1980.

5 *Current Mexican Foreign Policy and United States Interest*, Washington, junio de 1980. (Mimeo.)

élite política norteamericana. Pero en caso de un decidido ascenso de la revolución en El Salvador y Guatemala, pueden encontrar eco en los sectores más conservadores de la sociedad mexicana. El problema de Centroamérica se convertirá, entonces, en un problema para la vida interna de México, aunque por motivos bien distintos a los que señalan las visiones alarmistas de Constantin Menges. Será un peligro para ella en la medida que sea el pretexto para desencadenar una ofensiva similar a la que se contempló en México en los años que siguieron al triunfo de la revolución cubana. Cabe recordar, para dar un ejemplo, los hechos de 1961 cuando, inspirados por el deseo de contrarrestar los efectos de la revolución cubana en México, los grupos empresariales y los sectores más reaccionarios del clero llevaron a cabo una fuerte movilización —que tuvo su mejor expresión en la ciudad de Puebla— para avanzar sus posiciones restando terreno a las personalidades más conocidas de la "izquierda de la familia revolucionaria" encabezada por el general Cárdenas.⁶

Al iniciarse el decenio de los ochentas, México se encuentra ante la doble perspectiva de presiones provenientes de Estados Unidos para influir sobre decisiones en materia de petróleo, y una posible campaña que, con el objeto de modificar los lineamientos de su política exterior, maneje con alarmismo el peligro de la extensión de la actividad revolucionaria centroamericana hacia el interior del territorio nacional. ¿Qué efectos podría tener todo ello en las nociones tradicionales de seguridad nacional que con ligeras variaciones se han impuesto desde finales de los años cuarenta?. Contestar esa pregunta obliga a un breve repaso de las características sobresalientes de dicha noción.

LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO; EL TRIUNFO DE LA VERSIÓN DE LOS GRUPOS CIVILES

Una característica sobresaliente del tema de la seguridad nacional en México es la escasa participación que tiene el sector militar, tanto en la definición misma del concepto, como en la toma de decisiones sobre los mecanismos más adecuados para hacer frente a los peligros que la acechan. Al contestar a un reportero que lo interrogaba sobre el significado de la seguridad nacional, el Secretario de la Defensa, Félix Galván, confirmó en fechas recientes el papel periférico de las fuerzas armadas en

⁶ Sobre las reacciones de la derecha en México frente a la política del gobierno hacia Cuba, véase Olga Pellicer de Brody, *México y la revolución cubana*, ed. El Colegio de México, México, 1972.

los esfuerzos para dar contenido a esa expresión al contestar:

Es una definición mía, y me disculpa si no es la más apropiada. Yo entiendo por seguridad nacional el mantenimiento del equilibrio social, económico y político, garantizado por las fuerzas armadas.⁷

En lo escueto y titubeante de la respuesta, el alto mando del ejército dejaba implícito uno de los fenómenos más interesantes del Estado mexicano contemporáneo: el hecho de que los rasgos particulares de ese equilibrio social, económico y político, la ideología que lo inspira, las relaciones de clase que propicia, y el poder respectivo que adjudica a cada una de las clases, no es asunto del ejército. Desde finales de los años cuarenta, esto ha quedado en manos de los aparatos civiles del Estado: las organizaciones de masas afiliadas al partido dominante y la élite llamada de manera muy general la "familia revolucionaria". Definida por tales actores, la seguridad nacional adquiere en México connotaciones muy distintas a las que son frecuentes en otros países latinoamericanos, o las que privan en el pensamiento político norteamericano. No se la define en términos de los "peligros de agresión", sino en términos del cumplimiento o no de las grandes metas fijadas en la Constitución de 1917. Algunas de esas metas ya se han cumplido y constituyen, en la ideología del grupo dominante, el mejor soporte de la seguridad nacional. Baste citar la expropiación petrolera y la consiguiente recuperación de los recursos naturales para beneficio de la nación, el dominio del Estado sobre sectores económicos claves, como las comunicaciones, la electricidad, el petróleo, la petroquímica básica, etcétera. Otras metas no se han alcanzado (las relacionadas con el problema agrario son las más evidentes), pero siguen siendo válidas como instrumentos de movilización, como valores en torno a los cuales se aglutinan, en determinados momentos, fuerzas políticas muy importantes. Y esto permite que todavía sea legítimo opinar —como lo hizo recientemente el periódico *Uno más Uno*:

Para los mexicanos, seguridad nacional empieza por la seguridad social en su sentido más amplio, y en ella se finca. Seguridad es cumplimiento de los mandatos constitucionales básicos surgidos del pacto revolucionario de 1917, es defensa resuelta de los recursos naturales, generación de riqueza, reparto equitativo de la renta. [...] Es la certidumbre de que, si bien no se han suprimido las desigualdades, no está cerrada la posibilidad de abrir espacios de acción real que permiten avanzar en esa dirección. *La*

⁷*Proceso*, 22 de septiembre de 1980, p. 6.

*inseguridad se daría con la escisión de los conceptos de soberanía e interés social.*⁸

Las peculiaridades de la noción mexicana de seguridad nacional no serían comprensibles sin atender a diversas circunstancias: la primera, el proceso que desemboca en los años cuarenta en lo que se ha llamado "la despolitización del ejército mexicano", o, en otras palabras, el repliegue del sector militar frente a los aparatos civiles del Estado. A partir de allí arranca una política del gobierno mexicano que, entre otras cosas, reduce a su mínima expresión los gastos en armamento; a partir de allí, pierde vigencia en el discurso político de los grupos dominantes el concepto de agresión o amenaza de agresión interna o externa.

En segundo lugar cabe citar el hecho de que, aunque la participación de los militares en el mantenimiento de la estabilidad política no ha desaparecido totalmente, ocurre en casos de excepción, o de manera puramente residual. Ciertamente esa participación fue decisiva en la huelga ferrocarrilera de 1959 y en el movimiento estudiantil de 1968; pero bien puede afirmarse que se trató de acontecimientos poco he-cuentes en la vida política mexicana. La presencia de los militares es más constante, pero también secundaria como factor de estabilidad, en la vigilancia y el mantenimiento de la comunicación con las elites políticas en las zonas rurales, o en las crisis que se presentan en las gubernaturas de los estados. Con todo, esos casos no pueden considerarse decisivos para la estabilidad del sistema político imperante.

La estabilidad se ha logrado gracias a la solidez de las instituciones civiles y al esfuerzo constante del grupo dirigente para afinar y modernizar sus mecanismos de control. Entre ellos se encuentran algunos poco frecuentes en otros regímenes políticos, como son: una movilización de apoyos al gobierno provenientes de diversos sectores de clases mediante la manipulación de una ideología revolucionaria y los ofrecimientos e ilusiones que acompañan, por ejemplo, al cambio sexenal de presidente de la República; la movilización sistemática de las organizaciones incorporadas al partido a favor de la acción gubernamental; la negociación "controlada" con el movimiento obrero que, por una parte, consolida la posición de los líderes oficiales, y, por la otra, va dando a sectores obreros privilegiados incentivos suficientes para neutralizar sus demandas; la imposición de una fuerte disciplina entre los dirigentes del aparato político, quienes deben aceptar la autoridad suprema del

⁸ Editorial, *Uno mas Uno*, 13 de septiembre de 1980.

presidente en turno; etcétera. En el seno de un sistema político de esa naturaleza, no hay' cabida, hasta ahora, para situaciones en las cuales puedan florecer las visiones maniqueas de "la agresión comunista internacional".

LA RESISTENCIA A LA IDEA DE LA AGRESIÓN COMUNISTA INTERNACIONAL

El carácter de los grupos que definen la seguridad nacional en México, y el funcionamiento eficiente de las instituciones civiles para el control de la actividad política, son el antecedente necesario para entender la resistencia del gobierno mexicano a subordinarse a conceptos y mecanismos construidos en el seno del sistema interamericano durante la guerra fría. Allí, a más de una visión muy crítica del manejo esquemático de la idea de la "agresión comunista internacional", México ha desarrollado su propio concepto de soberanía y *se* ha opuesto a la militarización del sistema.

Fue en la reunión de Caracas en 1954 con motivo de las discusiones y propuestas sobre el tema de Guatemala, que el gobierno mexicano dejó claro su rechazo a interpretaciones equívocas de la idea de agresión comunista. Por ejemplo, al insistir en que la intervención comunista no podía definirse en abstracto, uno de los representantes mexicanos se refirió entonces a la posibilidad de que naciera un régimen comunista en las Américas como resultado de la voluntad libre de los pueblos, es decir, sin estar "instigado por agentes extranjeros". De ocurrir tal cosa, sería reprobable, desde la perspectiva mexicana, cualquier acto en contra que violara el principio de la no intervención.

Con respecto a la noción de soberanía, Mario Ojeda —que es quien mejor ha estudiado la política de México frente al problema de la seguridad en el continente americano—ha señalado que "México se ha caracterizado por haber seguido su propia interpretación de soberanía. Podría decirse que se ha apegado a una postura muy cercana a la de plena soberanía".⁹ Parecería que las demás naciones latinoamericanas defendieron con el mismo empeño el mismo principio. Sin embargo, esto no fue así debido a que el advenimiento de la guerra fría, y el temor a la subversión interna con ayuda del exterior, trajo para algunos gobiernos del continente la necesidad de revisar las interpretaciones

⁹ Mario Ojeda, *Alcances y límites de la política exterior de México*, ed. El Colegio de México, México, 1976, pp. 35-67.

existentes, llegándose a aceptar la tesis de la "soberanía limitada" y justificándose en consecuencia, actos de intervención unilateral y colectiva.

Para llevar a cabo esas intervenciones colectivas se ha tratado de ampliar la militarización del sistema interamericano, idea a la que México se ha opuesto sistemáticamente. Desde 1948, en la reunión de Bogotá, México fue el principal obstáculo a la creación del Consejo de Defensa Interamericano. Ciertamente permitió que siguiera funcionando la Junta Interamericana de Defensa, que había sido creada durante la guerra; pero se trataba de un organismo con simples funciones de asesoría, muy distantes al Estado Mayor continental que se contemplaba en los proyectos para la creación del Consejo.

Desde entonces, México, a más de resistirse a la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos para la defensa de la agresión externa o la lucha contra la "subversión" interna, ha votado en contra de las acciones colectivas de naturaleza militar decididas en el seno de las reuniones de consulta. El caso más conocido fue su oposición a la fuerza interamericana de paz que actuó en la República Dominicana en 1965. Acorde con esa política, México es el país de América Latina que tiene una participación menor en los programas de asistencia militar norteamericana. El único programa en que ha participado es el del entrenamiento de oficiales, los cuales han sido enviados en número reducido cuando se compara con el de otros países latinoamericanos.

Estos rasgos de la política del gobierno mexicano en el sistema interamericano, aunados al interés en mantener vigentes para fines ideológicos valores y posiciones de corte revolucionario, explican la simpatía general hacia las revoluciones en Centroamérica a que nos hemos referido anteriormente. A pesar de las llamadas alarmistas de los analistas norteamericanos, no resulta fácil para los dirigentes mexicanos apartarse de esa simpatía general.

LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL

Para terminar debemos retomar las preguntas formuladas anteriormente relativas a la posibilidad de que la situación petrolera o los problemas de Centroamérica lleven a una re-formulación de la noción

de seguridad nacional, u otorguen un papel más activo al sector militar en la tarea de asignarle nuevos contenidos.

Sería apresurado rechazar el impacto que tendrá la situación petrolera en la posición tradicional de los militares en el sistema político mexicano. Como cualquier otro grupo de interés en México, buscarán la manera de participar de los beneficios derivados de las exportaciones petroleras, lo que, en una coyuntura en la que es fácil manejar argumentos sobre la conveniencia de defender mejor las riquezas petroleras recién descubiertas, propiciará, sin duda, un aumento de los recursos destinados al sector militar. De hecho, ya se advierte en los últimos años un crecimiento de la industria militar en México, de las partidas destinadas a la Secretaría de Defensa y, en general, de la idea de que, correlativamente a la importancia internacional y estratégica del país, será necesario "modernizar" y apoyar a los sectores encargados de "garantizar" el orden y la seguridad.¹⁰

Esto no quiere decir que se perciban aperturas para una mayor participación de los militares en la tarea de definir la naturaleza del equilibrio social, económico y político del país, o en la determinación de situaciones que atenten contra la seguridad nacional. Hasta ahora, todo sugiere que lo que cobrará fuerza serán las tendencias a asimilar la seguridad nacional a una política petrolera que sea acorde con los postulados de la Constitución de 1917, o, en otras palabras, que no entre en conflicto con la idea de que los hidrocarburos deben ser utilizados, fundamentalmente, para beneficio interno de la nación y que su producción no se puede decidir en función de las necesidades externas. La evolución del nacionalismo petrolero en los últimos años, el diálogo con Estados Unidos al respecto y las decisiones de marzo de 1980 sobre la plataforma de producción apuntan en ese sentido.

Por lo que toca a la situación de Centroamérica, el breve repaso de la posición tradicional de México en el sistema interamericano pone de relieve el grado en que la simpatía por los cambios sociales en esa región está enraizado en profundas tradiciones de la diplomacia mexicana. No es la primera vez —baste citar el gobierno de Arbenz en Guatemala— que México expresa apoyo a la revolución centroamericana. Tampoco sería la primera vez que algunas voces en Estados Unidos tratan de ejercer presión para desviar esa política. El hecho es que, mientras las organizaciones que conforman el sistema político mexicano sean capaces de garantizar, como lo han hecho hasta ahora, la estabilidad

¹⁰ Véase el capítulo relativo a Seguridad Nacional en el Plan Global de Desarrollo, elaborado por el gobierno de López Portillo.

política del país, habrá pocas perspectivas para un avance serio de las versiones alarmistas sobre la extensión de la "subversión" al territorio mexicano. Esto no impide, desde luego, que se llegue a situaciones de conflicto, similares a las que sacudieron el país a comienzos de los años sesenta como resultado, en gran medida, del impacto de la revolución cubana. Pero se trata de movilizaciones momentáneas, que pueden ser neutralizadas y absorbidas por el aparato estatal.

La posibilidad de que cambie la noción mexicana de seguridad nacional depende de la capacidad del actual sistema para seguir logrando, que se acepte como legítima la idea de que "si bien no se han suprimido las desigualdades, no está cerrada la posibilidad de abrir espacios de acción real que permiten avanzar en esa dirección".¹¹

¹¹ Uno mas *Uno*, cit.